

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, mayo once (11) de dos mil veintitrés (2023)

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310500820180005001, promovido por la señora **VILMA YENNY DEL CARMEN AGUDELO ARANGO** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, frente a la sentencia emitida el diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **120**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **ANTECEDENTES**

La señora Vilma Yenny Del Carmen Agudelo Arango interpuso acción judicial, solicitando la declaración de la nulidad parcial del dictamen del 13 de febrero del año 2008, realizado por el ISS en su momento solo respecto a lo de la fecha de estructuración. Por tanto, solicita se declare que tiene una fecha de estructuración del 10/12/2002 del 69.50% sustentada en la Historia Clínica, por tanto, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde la fecha de la estructuración y con las mesadas adicionales de junio y diciembre, así como los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso; de manera subsidiaria la indexación.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso que, nació el 6 de noviembre de 1959, es afiliada a RPMCD desde el año 1997 y el ISS en su momento la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 69.50% estructurada el 4 de mayo de 1974. Expuso, que el 2 de marzo de 2005 solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez que fue negada mediante resolución 002525 de 30 de enero del año 2009 e inconforme con el dictamen que le fue realizado consultó

a la IPS de la Universidad de Antioquia, en donde se determinó que cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% estructurada el 10 de diciembre del año 2002, momento para el cual, era cotizante activo y tenía 69.50% de pérdida de capacidad laboral. Finalmente indicó que la pasiva ha tardado más de 4 meses en el reconocimiento del derecho.

**Admitida la demanda,** Colpensiones dio respuesta al libelo gestor indicando:

Aceptó como cierto lo que se logra desprender de la historia laboral, así como lo esgrimido en la pérdida de capacidad laboral dada por Colpensiones, y enunció que la fecha de estructuración se encuentra en controversia. Enunció que de acuerdo a la Resolución 02525 de 30 de enero de 2009, la demandante no logra acreditar la densidad de semanas para acceder a la pensión de invalidez.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, e interpuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de la obligación de declarar la nulidad de los dictámenes y de reconocer la pensión de invalidez”, “Inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora”, “Prescripción”, “Imposibilidad de condena en costas”, “La genérica”.

En sentencia proferida el 19 de febrero del año 2021, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, declaró la nulidad del Dictamen Médico Laboral emitido el 13 de febrero de 2008 por la oficina de Medicina Laboral del ISS y dio plena validez a la valoración realizada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 20 de enero del año 2019, por lo cual, concedió pensión de invalidez a la demandante causada desde el 10 de diciembre del año 2002, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente para cada año,

ordenando el pago de un retroactivo pensional causado desde el 1 de febrero del año 2015, por haberse generado la prescripción de las mesadas en fecha anterior, en suma de \$64.085.724. Ordenó el pago de la indexación del retroactivo ordenado.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia proferida respecto a dos puntos. El primero sobre la prosperidad parcial de la prescripción, ello, pues adujo que en la valoración realizada por el médico de la Universidad de Antioquia se sustenta el dictamen en que la fecha de estructuración es por los antecedentes de la demandante, y el realizado por Colpensiones violó cualquier derecho fundamental de la demandante y el mismo decreto que lo regula, pues para la fecha de estructuración debe tenerse una prueba objetiva, y en el dictamen realizado por Colpensiones se dejó constancia de la inexistencia de la historia clínica, simplemente da una fecha contradiciéndose en su manifestaciones y además, tiene en cuenta la historia laboral, situación que se encuentra prohibida por el manual. Indicó que, por el contrario, el perito que realizó la valoración aportada por la parte, fue objetivo y claro en decir que no se podía dar una fecha porque no estaba en la historia clínica, por lo cual, la demandante no puede verse afectada por una impericia imputable a la entidad, pues no puede alegar su propia culpa en su beneficio, ya que indujo a la señora Agudelo Arango en un error. Igualmente, arguyó que la prescripción como tal, requiere ciertos requisitos que son: conocimiento, causación y exigibilidad y en el caso de marras la demandante no tuvo tal discernimiento pues se indujo en error por la misma entidad.

Ahora, de considerarse que se deba aplicar la prescripción, indicó que, al haber presentado la demanda en el año 2017, teniendo en cuenta la prescripción, tres años atrás sería 19 de diciembre del año 2014 y no desde 31 de diciembre del año 2015. El segundo punto de apelación lo centró en los intereses moratorios, pues narró que la falta de pericia de la demandada y ausencia de conocimiento técnico del manual para la prueba objetiva en la aplicación de la fecha de causación, así como también hubo una inducción en error a la demandante pues no se encuentra justificada la negativa de la entidad demandada, por lo cual, se deben reconocer los intereses moratorios como medida resarcitoria a la demandante.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada de Colpensiones, indicó que, las calificaciones de invalidez son los documentos con los cuales la entidad reconoce las prestaciones derivadas de la invalidez, con base en el manual único para la calificación vigente, y ante la inconformidad referida por la accionante, se destaca que contó con la posibilidad de recurrirlo ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, sin que hiciera uso de los recursos de Ley, de manera que el Dictamen emitido el 13 de febrero de 2008, por el ISS, se encuentra el firme, resultando necesario que la Justicia Ordinaria Laboral se encargue de dirimir la controversia suscitada con ocasión a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral. Sumado a ello, arguyó que en el expediente administrativo obra dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 201201778NN de fecha 19 de diciembre de 2012 emitido por Colpensiones, con calificación de pérdida del 50.2% de origen común, con fecha de estructuración de 04 de abril de 2012. Igualmente, de cara a la pretensión de invalidez pretendida, destaca que el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, dispuso los términos para la revisión del estado de invalidez, sin que la demandante se

encuentre en término para ello. Con el anterior argumento, solicita la revocatoria del fallo.

El apoderado de la parte accionante, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia indicando que el perito nombrado por el *a quo* dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 74.8% estructurada el 10 de diciembre del año 2002, utilizando como métodos la normatividad, el estudio de la historia clínica, las pruebas de laboratorios y el examen físico del paciente. Enunció que el citado experto afirmó que la fecha de estructuración fijada fue conforme el artículo 3 del decreto 1507 de 2014, prueba objetiva, puesto que no es posible fijarla de cara a la historia clínica, con lo que, se creó el convencimiento en la Juez de primera instancia. Peticiono por tanto, teniendo en cuenta que no existe tarifa legal de prueba para acreditar el estado de invalidez, se confirme la sentencia de primera instancia y se reconozca la pensión a favor de la demandante.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si es procedente decretar la nulidad de la valoración realizada por Colpensiones a la demandante el 13 de febrero del año 2008, respecto a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, y si es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez. De ser así, desde qué fecha y si le asiste el pago de los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

## **CONSIDERACIONES**

Conforme al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación, y corresponde al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, hoy Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, a las Compañías de Seguros que asumen los riesgos de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar inicialmente la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias, pero cuando el interesado no está de acuerdo y manifiesta su inconformidad, la entidad debe remitirlo a la Junta de Calificación de Invalidez del orden Regional para que dirima la discrepancia. La decisión de ésta es apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y contra ellas proceden las acciones legales.

Preliminarmente ha de indicarse, que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia tiene definido que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las entidades mencionadas no son medios probatorios solemnes, y por ende el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad o lo persuadan más, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente ha referido que como tales dictámenes no obligan al Juez; dentro del marco de esa libertad probatoria, éste puede acudir a otros medios idóneos para establecer la fecha de estructuración de la invalidez, porque no en todos los casos ésta puede inferirse con certeza (sentencias SL 16.374 de 4 de

noviembre de 2015, Radicado 53.986; SL 2496 de 2018; SL 697 de 2019; y SL 3117 de 5 de agosto de 2019, Radicado 73.341).

Igualmente quedó claro por la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, tratándose de la fecha de estructuración, los jueces podrán entrar a modificar la establecida, siempre que encuentren medios técnicos de prueba que indiquen lo contrario. Sentencia de la SL CSJ, de oct. 19 de 2006, rad. 29622, MP Carlos Isaac Nader, donde se indicó:

*“Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables. La regla sentada en el fallo citado por el recurrente como apoyo de su criterio es que, en principio, la declaración del estado de invalidez es materia de expertos y no corresponde, en los actuales momentos, a la entidad de seguridad social, como ocurría antes, sino a unos entes autónomos, como son las juntas Regionales en primera instancia, y la Nacional en último grado.*

*De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Por el contrario, en reciente sentencia del 13 de septiembre 2006 (rad. 29328), tuvo esta Sala de Casación oportunidad de referirse al tema, en los siguientes términos:*



*“Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas por los interesados contra las evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y que cumple funciones públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de administración descentralizada por colaboración.*

*Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa oportunidad, se planteó una manifiesta contradicción de la valoración médica sobre el nivel de la incapacidad entre las juntas de calificación que intervinieron para tal efecto, la Corte no tuvo duda sobre el carácter discutible del punto y la plena competencia de los jueces para establecer, también por medios técnico-científicos el verdadero grado de invalidez del afectado. Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la fecha en que se estructura la invalidez, porque no en todos los casos se podrá inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por lo mismo, incontrovertible, como sería lo ideal. Para la muestra un botón: En el sub examine, el Tribunal consideró contraevidente e ilógico que una persona haya laborado durante varios años ejerciendo actividades de vendedor y la Junta de Calificación de Invalidez desconozca esa realidad, dejando de lado el material probatorio que tuvo a su disposición y sin que ameritara un pronunciamiento al respecto, y se dictamine que la invalidez se produjo en la infancia temprana, muchísimos años antes del despliegue de una vida laboral, esa sí demostrada fehacientemente.”*

En el caso que ocupa la atención de la Sala no fue objeto de reparo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se determinó por parte de Colpensiones, sino, la fecha en que se estimó que se estructuró la pérdida de capacidad laboral dela demandante.

En folio digital 17 a 20 del pdf ExpedienteEscaneado, se constata que Colpensiones para el 13 de febrero del año 2008 realizó valoración del estado de salud de la señora Vilma Yenny del Carmen Agudelo Arango, en donde se dejó la siguiente anotación:

*“Paciente que no trae historia antigua por tener más de 20 años y ya caducó, pero empezó por primera vez a cotizar a pensiones por prosperar como inválida en 1994 (1800 pesos). En 1974 hay reporte de desprendimiento de retina seroso. Por historia del 23/11/2007 ya hay nota por oftalmología de que no percibe la luz por ambos ojos, por desprendimiento de retina de ambos ojos”.*

Teniendo en cuenta esta anotación se llegó al diagnóstico de CEGUERA TOTAL bajo las deficiencias enunciadas cómo:

Ceguera Total por desprendimiento de retina bilateral antiguo, tabla 13.2 puntaje 45% y finalmente se otorgó en concordancia con las discapacidades y la minusvalía un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 69.50% estructurada el 4 de mayo del año 1974 de origen común.

Se acompañó con la valoración una precaria historia clínica de la demandante en donde se resalta a folio 23 -24 digital del miso pdf la valoración, de NO MEJORA para el 10 de diciembre del año 2002; y en folio digital 28-29 para el 23/11/2007

se dejó la acotación por parte de la Sociedad San Vicente de Paul, “No existe ningún tto para devolverle visión”.

Allegado por la parte actora y con el propósito de desestimar la valoración realizada por Colpensiones, se incorporó dictamen de parte, realizado por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, quien el 14/11/2017, quien bajo el Decreto 917 de 1999 valoró el estado de salud de la demandante encontrando lo siguiente:

Diagnóstico: Ceguera en ambos ojos, desprendimiento de la retina y argumentó:

“SI BIEN LA PACIENTE PRESENTA UN ANTECEDENTE DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA, NO EXISTE EVIDENCIA EN SU HISTORIA CLINICA QUE LA ACTUAL PERDIDA VISUAL SE HALLA PRESENTADO DESDE EL MOMENTO DEL DESPRENDIMIENTO DE DICHA RETINA POR LO QUE CONSIDERO QUE LA FECHA ASIGNADA POR LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES SEGURO SOCIAL NO SE BASO EN PRUEBAS OBJETIVAS DE LA HISTORIA CLINICA DE OFTALMOLOGÍA. POR LO ANTERIOR Y CON BASE EN LAS PRUEBAS APORTADAS CONSIDERO QUE LA EVIDENCIA MAS ANTIGUA QUE SE TIENE SOPORTE ES EL DÍA 10/12/2002 DE LA PÉRDIDA VISUAL POR LO QUE DESDE ALLÍ CONSIDERO SE DEBE ESTRUCTURAR LA INVALIDEZ YA QUE PARA ESA FECHA EXISTÍA UNA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL SUPERIOR A 50%”.

Causa reparo a la Sala esta valoración, por no atenerse al protocolo dado por el artículo 8 del Decreto 917 de 1999, pues en el cuerpo de su experticia no identifica el porcentaje dado a deficiencia, discapacidad y minusvalía, tan solo se establece que, de acuerdo a la historia clínica más lejana, la pérdida de capacidad laboral era el 10/12/2002.

Ordenado por el despacho en la audiencia del artículo 77 del CPT y SS, se dispuso experticia con el fin de determinar la pérdida de capacidad laboral de la demandante y la fecha en que se consolidó, para lo cual, se nombró a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien el 6/02/2019, quien bajo el Decreto 917 de 1999 y teniendo en cuenta como deficiencias las de la tabla 13.1 y 13.2 “Deficiencia global por alteración en la agudeza visual”, determinó una pérdida de capacidad laboral de la demandante del 74.8% conforme a valoración física e historia clínica aportada, estructurada el 10 de diciembre del año 2002, explicando en el pliego de la calificación, que dicha fecha es la más antigua de la historia clínica conocida en donde ya había una alteración visual que generaba una discapacidad superior al 50%.

Realizada esta valoración por el médico adscrito Juan Diego Zapata Serna, fue citado por la *a quo* a sustentar sus conclusiones en audiencia del artículo 80 del CPT y SS, donde explicó que **no necesariamente el desprendimiento de retina causa una ceguera total**, pues ello depende de la evolución del paciente, sin que sea posible determinar *a priori* sin fundamento alguno, que el solo desprendimiento generara la pérdida de capacidad laboral. Indicó que la deficiencia visual es propia de la naturaleza del ser humano, siendo la historia clínica el elemento primordial para verificar hasta donde se perdió la agudeza visual, sin que, en un concepto laboral de pérdida de capacidad laboral, se pueda, sin elementos claros de la historia

clínica, dar una fecha de estructuración; concluyendo, que lo más apropiado fue tomar el aparte más antiguo de la historia clínica que narrara el suceso sin recuperación alguna.

La Juzgadora de primera instancia, precisó que el dictamen proferido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia decretado y practicado en el trámite del proceso se encontraba acorde con el Decreto 917 de 1999 y se sustentó suficientemente en audiencia.

La Sala, considera importante recordar los parámetros del decreto 917 de 1999, respecto a la estructuración de la invalidez:

*“artículo 3°. Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.”.*

Artículo 9°. Instrucciones generales para los calificadores.

“El Manual único para la calificación de la invalidez” establece con base en los criterios y componentes definidos en los artículos anteriores, un método uniforme, de uso obligatorio para la determinación legal de la pérdida de la capacidad laboral que presenta un individuo al momento de su evaluación.

La calificación de la pérdida de capacidad laboral del individuo deberá realizarse una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la patología, se termine el tratamiento y se hayan realizado los procesos de rehabilitación integral, o cuando aun sin terminar los mismos, exista un concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría. “

.....

“Artículo 4º. Requisitos y procedimientos para la calificación de la invalidez y la fundamentación del dictamen. Para efectos de la calificación de la invalidez, los calificadores se orientarán por los requisitos y procedimientos establecidos en el presente manual para emitir un dictamen. Deben tener en cuenta que dicho dictamen es el documento que, con carácter probatorio, contiene el concepto experto que los calificadores emiten sobre el grado de la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte de un afiliado y debe fundamentarse en:

.....

c) Definida la pérdida de la capacidad laboral, se procede a la CALIFICACION INTEGRAL DE LA INVALIDEZ, la cual se registra en el dictamen, en los formularios e instructivos que para ese efecto expida el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales deben registrar por lo menos: el origen de la enfermedad, el accidente o la muerte, el grado de pérdida de la capacidad laboral causado por el accidente o la enfermedad, la fecha de estructuración de la invalidez y la fundamentación con base en el diagnóstico y demás informes adicionales, tales como el reporte del accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso.”

De lo anterior se constata que las conclusiones a las que se arriba en las valoraciones médicas con carácter de calificación, deben encontrarse sustentadas no sólo en el examen físico del paciente, sino, en la historia clínica que sea aportada, **sin hacerse conjetura alguna**, pues la evolución de la enfermedad depende única y exclusivamente de cada paciente, y si bien hay patologías con conclusiones conocidas y predecibles, los tiempos en el que ello se den difieren de paciente a paciente.

Es por ende, que ante la coherencia de la valoración realizada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en manos del médico adscrito doctor Juan Diego Zapata Serna, que se apoya la Sala para concluir que, la señora Vilma Yenny Del Carmen Agudelo Arango cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 74.8% estructurada el 10 de diciembre del año 2002, pues de cara al artículo 61 del CGP aplicable al procedimiento laboral conforme el artículo 145 del CPT y SS, es el elemento probatorio que mayor claridad otorga en el plenario, logrando desestimar las conclusiones dadas por Colpensiones, que se basaron en simple conjeturas sin soporte alguno.

Respecto al dictamen como elemento probatorio, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso en sentencia SL3992-2019 reiterada en SL509-2022 lo siguiente:

“Sin embargo, al mismo tiempo, por la diversidad de factores que confluyen a la determinación de la realidad de la salud del paciente y la evolución de su capacidad laboral, la Sala ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad

substantiam actus. Contrario a ello, ha destacado esta corporación, en múltiples oportunidades, que dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el Juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (Ver CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019 y CSJ SL3380-2019).

En dicha medida, no es cierto que, como lo reivindica la censura, la calificación del estado de invalidez constituya una cuestión técnica ajena al conocimiento de los jueces, pues, por el contrario, es precisamente el Juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Para esos fines, a su vez, el Juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones.

Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el Juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria.”



Es imperativo que, se recuerde el criterio que recientemente expuso la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 2349 de 2021:

“Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción.

Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó:

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica -decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (...). Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697- 2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019).

En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que

se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona”.

Acontece consecuente confirmar por tanto, la decisión de la a quo en tanto declarar conforme a la realidad de la demandante las conclusiones de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y declarar la nulidad parcial del dictamen efectuado por Colpensiones el 13 de febrero de 2008, para en su defecto indicar que la señora Vilma Yenny del Carmen Agudelo Arango cuenta con la pérdida de capacidad laboral del 74.8% estructurada el 10/12/2002.

### **Pensión de invalidez:**

Para la fecha de estructuración del estado invalidante de la demandante, es decir, para el 10/12/2002, se encontraba vigente el artículo 39 de la ley 100 de 1993 primigenio que estableció:

*“ARTÍCULO 39. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:*

- a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez;*
- b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez;*

*PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los párrafos del artículo 33 de la presente ley.”*

Conforme a la historia laboral aportada a la foliatura, se constata que la señora Agudelo Arango para la fecha de estructuración se encontraba laborando, y claro está para dicha calenda, contaba con una densidad de semanas muy superior a 26, debiéndose concluir que cumple con los requisitos establecidos en la norma para acceder a la prestación, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente para cada año, conforme a la verificación de los IBC reportados en la historia laboral, los cuales no ascienden del salario mínimo y sobre 14 mesadas pensionales al causarse la pensión con antelación a la entrada en vigencia del acto legislativo 001 de 2005 como bien lo indicó la *a quo*.

Ahora, se interpuso por la pasiva la excepción de prescripción, la cual, fue objeto de recurso de alzada por la parte actora, al ordenarse el pago de la pensión reconocida a la demandante desde el 31 de enero del año 2015, pues se estima por el apelante que existió una inducción en error por parte de Colpensiones en cuanto el dictamen que dio a conocer a la demandante no se encontraba respaldado en prueba objetiva alguna. Sin embargo, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los dos preceptos lleva a concluir que

únicamente es posible interrumpir la prescripción por una vez. (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908)

Es así pues, como después de que agotó la reclamación administrativa, queda la vía abierta para que la solicitante, ante no estar de acuerdo con la decisión plasmada en la decisión de la entidad, acuda a la jurisdicción para que se protejan los derechos que considera han sido vulnerados, e incluso, recurra el dictamen para que se surta el correspondiente trámite hasta arribar a decisión en firme.

En casos como el de la señora Agudelo Arango, en los que se encuentra supeditado el reconocimiento a la existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral, se ha predicado por la Sala Laboral:

*“Que para establecer la prescripción de las mesadas derivadas de la pensión de invalidez, la Corte ha aplicado para el efecto, esto es, para determinar la pérdida de las causadas en el tiempo sin reclamación, las reglas establecidas para las acciones indemnizatorias del artículo 216 del CST, conforme se explicó en la sentencia CSJSL5703-2015, al rememorar las sentencias CSJ SL, 19 sep. 2006, rad. 29417 y CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 28821, concluyendo que, para predicar la exigibilidad de la obligación, se requiere del conocimiento pleno del peticionario, acerca de su estado de invalidez, pues no de otra manera podría hablarse de una actuación poco diligente, que genere el efecto liberatorio de la obligación, que trae consigo la prescripción extintiva de la acción.*

*En tal sentido, lo expuso la Sala en la citada sentencia al explicar:*

*[...] en tanto no se produzca la determinación del estado de invalidez [...], bien puede asentarse que la acción para la reclamación de tales derechos no ha nacido, por ende, en manera alguna puede predicarse que han prescrito -- actio non nata non praescribitur--.. Y si la acción judicial para el pago de las aludidas prestaciones económicas y asistenciales no*

*ha nacido, pues el del reconocimiento del estado de pensionado es imprescriptible por su carácter vitalicio, menos aún puede sostenerse válidamente que las mesadas pensionales como prestaciones económicas derivadas de dicho estado pueden verse afectadas por el cuestionado fenómeno letal liberatorio. En suma, para la Corte, el plazo prescriptivo de la acción tendiente al pago de la pensión de invalidez, que no de su reconocimiento pues ella es imprescriptible, se insiste, empieza a correr desde que el afectado ha tenido ‘conocimiento acabado’ de su estado de invalidez laboral, o sea, no simplemente desde cuando se causa el infortunio o se advierten los primeros síntomas de la afectación a la salud o integridad de la persona o trabajador, sino desde cuando queda firme la ‘determinación’ de la incapacidad o invalidez laboral que a ese respecto profiere la correspondiente Junta de Calificación de Invalidez.*

*Los efectos de la teoría ahora esbozada por la Corte han sido reconocidos en constante jurisprudencia, particularmente, frente a indemnizaciones plenas de perjuicios.” (SL 2023 de 2020).*

Es así pues como se determinó que: “*la prescripción de las mesadas pensionales, en casos como el presente, no puede contarse a partir del momento de la reclamación administrativa, como tampoco de la fecha de estructuración de la invalidez, en la forma que procedió el Colegiado, sino, se insiste, desde cuando el dictamen de pérdida de capacidad laboral queda ejecutoriado, halla la Sala configurado el sub motivo de aplicación indebida del artículo 151 del CPTSS, como se explicó en la sentencia CSJ SL, 6 jul. 2011, rad- 39867 y, de contera, el de infracción directa del artículo 488 CST, al que no se remitió.”.*

En atención a lo anterior habiéndose valorado la demandante ante Colpensiones desde el 13 de febrero del año 2008, incluso elevando reclamación pensional el 22 de febrero del año 2008 como se lee de la Resolución 2525 de 2009, se evidenció

una inactividad para comparecer a la jurisdicción al reconocimiento de los derechos pretendidos, pues la demanda se presentó solo el 31 de enero del año 2018, de acuerdo a acta de reparto que reposa en folio 02 del expediente digital, y por tanto, las mesadas pensionales causadas con antelación al 31 de enero del año 2015 se encuentran afectadas por el término prescriptivo como bien lo indico la Juez de primera instancia, con las deducciones correspondientes en salud.

### **Intereses moratorios**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prescribe que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la normatividad mencionada, la entidad administradora correspondiente debe reconocer y pagar al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a recibir el pago de las mesadas pensionales emerge del cumplimiento de los requisitos que la Ley exige para poder acceder a la pensión reclamada.

Sin embargo, en sentencias de 29 de mayo de 2003, Radicado 18.789; 13 de junio de 2012, Radicado 42.783, y 6 de noviembre de 2013, Radicado 43.602, el Alto Tribunal precisó que no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios en aquellos eventos en que la decisión de las administradoras de pensiones públicas o privadas de negar una prestación encuentren plena justificación, bien porque tengan un respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la Ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y

ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a tales administradoras no les compete y les es imposible predecir.

En el caso que nos ocupa no se avizora una actuación negligente por parte de Colpensiones como fondo pensional para la concesión del derecho, pues ello derivó de la prueba recaudada en el proceso que llevó a la nulidad de la experticia inicialmente dada a la demandante, y tan solo en el marco del proceso judicial se constató que en efecto la fecha de estructuración del estado de invalidez de la señora Agudelo Arango era el 10/12/2002, y no otra, por lo cual, no se considera por la Sala procedente el pago de los intereses reclamados.

Conforme la sentencia SL 359 de 2021, se confirma la indexación del retroactivo ordenado.

Así las cosas, se **CONFIRMARÁ INTEGRAMENTE** la decisión que se revisa en apelación y consulta, por las razones expuestas.

Ante la desventura del recurso de apelación, las costas en esta instancia a cargo de la accionante, y a favor de la accionada.

Se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000.000=)

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO:** Confirmar la sentencia proferida por el juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín emitida el diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

**SEGUNDA:** Costas a cargo de la demandante, y a favor de la accionada.

Se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000.000=).

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**Firmado Por:**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**

**Magistrado**

**Sala Laboral**



**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**

**Magistrado**

**Sala Laboral**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**

**Magistrado**

**Sala Laboral**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a641df5add89991e5e4ac314c52c3a6e76f038e86251b240daaedf8c816a9aa1**

Documento generado en 11/05/2023 03:11:00 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**